

INE/CG315/2019

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA, Y EL C. FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Ciudad de México, 8 de julio de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS**, integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El seis de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de queja signado por el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, postulado por Morena, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS

(…)

2. Como es bien sabido, el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo Montero es un cantante y actor mexicano, tal y como se puede apreciar en el contenido de las páginas de internet https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Montero y <https://www.instagram.com/pablomoficial/?hl=es-la>,



3. El día 4 de mayo del 2019, en la página de internet <https://www.facebook.com/PalestraAguascalientes/videos/vb.133858059985076/180402156180841/?type=2&theater>, con la frase “Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Anaya”; “La Saturnina, Calle Carranza en el Centro Histórico de Aguascalientes”; “Vimos Este Video en las Pantallas del Merendero San Pancho y al Final Logramos Conseguirlo”; “¡¡¡Se Hubieran Subido a Cantar con Becky G!!!”, además de que se difunde un video que a todas luces se aprecia trabajo profesionales de producción, tal y como se acredita siguiente (sic) imagen:



4. En el video en comento, se aprecia que los siguientes gastos que deben ser considerados como gastos de campaña:

- Gastos de producción del video
- Honorarios de artista y cantante Pablo Montero.



CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

- *Honorarios del Mariachi*

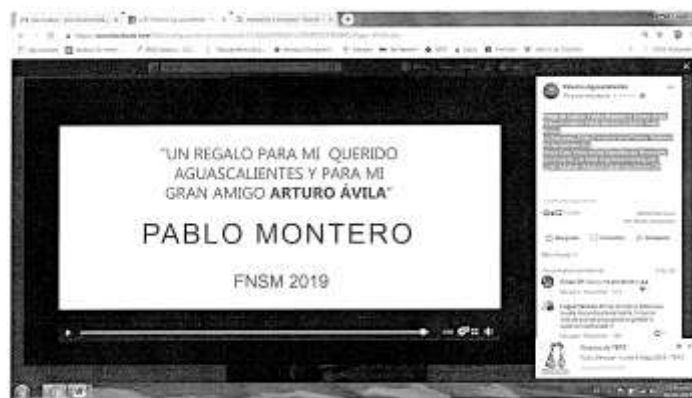


- *Alquiler de las instalaciones del Restaurante.*





5. De manera particular, los gastos descritos en el numeral inmediato anterior, deben ser considerados como una **aportación prohibida** a la campaña del partido político “MORENA” y a su candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, EL C. ARTURO ÁVILA ANAYA, provenientes del C. PABLO MONTERO, persona física con actividades empresariales, en virtud de que el video en comento termina con las frase “UN REGALO PARA MI QUERIDO AGUASCALIENTES Y PARA MI GRAN AMIGO ARTURO ÁVILA”; “PABLO MONTERO”; “FNSM 2019” tal y como se acredita con la siguiente imagen:



(...)

7. En este orden de ideas, es importante destacar que las imágenes de del (sic) video en donde aparecen cantando tanto el artista y cantante Pablo Montero y el C. ARTURO ÁVILA ANAYA, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, postulado por el Partido Político “MORENA”, corresponden al Restaurante denominado “la Saturnina”, situación

que se puede corroborar con el contenido de la página de internet https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g153976-d3998593-Reviews-La_Saturnina-Aguascalientes_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html en la que se aprecia la siguiente imagen.



8. Lo anterior, se acredita con el siguiente comparativo fotográfico:



9. Conforme a lo anterior, **se tiene documentado y acreditado que el C. ARTURO ÁVILA ANAYA**, es candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, postulado por el Partido Político MORENA, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, y durante su campaña electoral, **recibió una aportación de ente no permitido por la norma electoral en materia de fiscalización**, proveniente del C. Pablo Montero que es un cantante y actor mexicano, con actividades empresariales, **consistente en el (sic) la aportación en especie de los gastos de producción del video que se difunde en la página de internet** <https://www.facebook.com/PalestraAguascalientes/videos/vb.1338580599850>

[76/180402156180841/?type=2&theater](https://www.facebook.com/PalestraAguascalientes/videos/vb.133858059985076/180402156180841/?type=2&theater), junto con los gastos inherentes a su elaboración dentro de los que se incluyen los honorarios de artista y cantante Pablo Montero, los honorarios del Mariachi y el alquiler de las instalaciones del Restaurante denominado “la Saturnina”, pues dicho video termina con las frase “UN REGALO PARA MI QUERIDO AGUASCALIENTES Y PARA MI GRAN AMIGO ARTURO ÁVILA”; “PABLO MONTERO”; “FNSM 2019”, estrategia y gastos de campaña que **ADEMÁS DE LAS SANCIÓN QUE IMPLICA LA APORTACIÓN CONTRARIA A LA NORMA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN**, necesariamente debe ser reportada ante la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, a efecto de que los costos se tomen en cuenta para efectos de determinar si se incurrió o no en un rebase de topes de gastos de campaña.

(...)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:

1.- PRUEBAS TÉCNICAS.- Consistentes en:

- ✓ 12 imágenes fotográficas en blanco y negro de capturas de pantalla del contenido del video denunciado así como de las páginas de internet que ofrece como prueba.
- ✓ 1 URL que corresponde al video denunciado, a saber:
 - ❖ <https://www.facebook.com/PalestraAguascalientes/videos/vb.133858059985076/180402156180841/?type=2&theater>
- ✓ 3 URLs que corresponden a diversas páginas de internet, a saber:
 - ❖ https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Montero
 - ❖ <https://www.instagram.com/pablomoficial/?hl=es-la>
 - ❖ https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g153976-d3998593-Reviews-La_Saturnina-Aguascalientes_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
- ✓ Un disco compacto que contiene el video denunciado.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El diez de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir e integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS**, publicar el acuerdo de admisión y sus respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto; notificar el

acuerdo de admisión al Secretario del Consejo General del Instituto, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar el inicio del procedimiento y emplazar a las partes involucradas.

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

- a) El diez de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
- b) El trece de mayo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.

V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6767/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.

VI. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6768/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.

VII. Notificación de inicio de procedimiento al quejoso. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6770/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión e inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en su carácter de quejoso.

VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a Morena.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6769/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto.

- b) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, el Representante Propietario del partido denunciado dio respuesta al emplazamiento, mediante dos escritos sin número, en los siguientes términos:

Escrito presentado a las 19:55 horas:

“(…)

I) PRESUNTOS GASTOS Y EROGADOS (sic) **NO REPORTADOS.** *Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desconocemos la supuesta aportación por ente prohibido y los negamos en los términos en que pretende ser atribuidos al partido que represento de manera dolosa y subjetiva por el accionante.*

Por consiguiente no existe la omisión de reportar gastos, toda vez que los denunciados nos encontramos en tiempo para realizar los reportes de gastos de campaña tal y como lo marca el calendario para la fiscalización correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En este supuesto el periodo para el registro los informes de ingresos y gastos de campaña concluye el 29 de mayo y se tiene como fecha límite para su entrega hasta el 1 de junio, por lo que estamos ante un acto que no es definitorio, ya que sigue en proceso de registro de conformidad al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la normativa electoral vigente.

II) PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS. *Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gastos de campaña, se hace notar a esta autoridad que tal afirmación del quejoso deviene infundada pues todos y cada uno de los argumentos del accionante son parciales y con aportación de documentales subjetivas y de nulo valor probatorio pleno.*

“(…)

III) REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. *Al respecto, la Sala Superior, al momento de resolver el recurso identificado con el número SUP-JIN-359/2012, señaló que el rebase de tope de campaña, debe tratarse de un (sic) irregularidades plenamente acreditada lo cual no acontece en el caso que nos ocupa.*

“(…)

IV) Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, resultan total y absolutamente subjetivas pues hace referencia a presuntas fotografías tomadas de la página de Facebook y videos sin que se desprenda la presunta aportación indebida y omisión de reportar gastos, toda vez como se ha mencionado los reportes de los gastos se realizaran en su momento.

(...)

Es por la razones vertidas que no existen elementos para inculpar a este instituto político que represento de los infundados hechos atribuibles al mismo, pues de la lectura de la queja, no se desprende un sólo elemento que permita, de manera fehaciente, acreditar que Morena es omiso en el reporte de gasto y en consecuencia se dé un rebase de topes de gastos de campaña, toda vez que nos encontramos en plazo para realizar el reporte, el cual vence el periodo el 29 de mayo y la fecha límite de entrega es el 1 de junio presente.

(...)"

Escrito presentado a las 20:49 horas:

"(...)

En relación a la información requerida en los puntos 1 al 3, cabe manifestar que Morena y su candidato nos encontramos en tiempo para realizar los reportes de gastos de campaña tal y como lo marca el calendario para la fiscalización correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En este supuesto el periodo para el registro los (sic) informes de ingresos y gastos de campaña concluye el 29 de mayo y se tiene como fecha límite para su entrega hasta el 1 de junio, por lo que estamos ante un acto que no es definitorio, ya que sigue en proceso de registro de conformidad al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la normativa electoral vigente, por lo que no existe la omisión de reportar gastos, toda vez serán reportados durante el periodo en el SIF.

(...)"

IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Candidato denunciado.

- a) Mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, notificar el inicio del procedimiento y emplazar al C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, en su carácter de candidato denunciado dentro del procedimiento de mérito. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0411/2019, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.
- b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el candidato denunciado dio respuesta al emplazamiento en los mismos términos que el primer escrito de respuesta presentado por el partido incoado y, en obvio de repeticiones, se tienen por reproducidas sus alegaciones.

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección Jurídica del Instituto.

- a) El catorce y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/349/2019 e INE/UTF/DRN/416/2019, respectivamente, se solicitó a la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección Jurídica del Instituto, informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, correspondiente al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez.
- b) El cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DERFE/STN/24302/2019, el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informó que se localizó más de un registro coincidente.

XI. Solicitud de información y documentación a la Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

- a) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/357/2019, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto, realizara la certificación del contenido de las direcciones de internet aportadas por el quejoso en su escrito de queja.

- b) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/913/2019, la Directora del Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral de este Instituto, informó la admisión de la solicitud mencionada registrada con el número INE/DS/OE/67/2019, remitiendo copia del acuerdo de admisión, así como el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/72/2019, de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se practicó la certificación del contenido de las páginas de internet solicitadas.
- c) El dos de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/589/2019, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto, realizara la certificación del contenido de las direcciones de internet relativas a las agencias mediante las cuales se puede contratar al artista Pablo Montero.
- d) El cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/913/2019, la Directora del Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral de este Instituto, remitió la certificación solicitada.

XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

- a) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6859/2019, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, informara si el video denunciado era susceptible de ser considerado como un gasto de producción, y si tiene características similares a los que fueron pactados por Morena en favor del candidato denunciado.
- b) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DATE/116/2019, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos informó las características de producción del video de mérito, del cual considero que cuenta con producción, y señaló que el video investigado no coincide con los videos pautados entregados por Morena en favor del candidato denunciado.

XIII. Requerimiento de información y documentación al Propietario y/o Representante Legal del restaurante “La Saturnina”.

- a) Mediante Acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, requiriera al Propietario y/o Representante Legal del restaurante “La Saturnina”, a efecto que informara si las instalaciones

del restaurante fueron utilizadas como locación para la realización del video denunciado; así como la documentación legal y contable por la utilización del inmueble. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0430/2019, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

- b)** El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la Representante legal del restaurante “La Saturnina”, confirmó el uso de las instalaciones del restaurante en comento para la realización del video investigado, señalando que no se cobró por el uso de las instalaciones en razón que se contrató un desayuno para 50 personas, el cual incluía el uso de las mismas, el 29 de abril de 2019, a las 9:00 horas. El costo total del Buffet fue de \$10,000.00, remitiendo la factura número 14461, emitida a favor de la persona moral IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística S.A. de C.V. Asimismo informó la presencia de un mariachi de 6 integrantes que no amenizaron, solo actuaron, del cual desconoce el nombre y el de su propietario. A su escrito de respuesta adjuntó copia simple del Poder notarial que le otorga la representación legal del restaurante, copia simple del anverso y reverso de su credencial para votar, y copia simple de la factura en comento.
- c)** Mediante Acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, requiriera al Propietario y/o Representante Legal del restaurante “La Saturnina”, a efecto que confirmara o rectificara si la factura número 14461, corresponde al evento en que se realizó la grabación del video denunciado. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0575/2019, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- d)** El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la Representante legal del restaurante “La Saturnina”, confirmó que la factura en comento fue emitida a solicitud del personal que labora con el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya a nombre de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., y corresponde al consumo de alimentos del 29 de abril de 2019, durante el cual se realizó la grabación del video investigado. A su escrito de respuesta adjuntó copia simple del recibo de reservación para eventos número 0770, y copia simple del boucher de pago por la cantidad de \$10,000.00.

XIV. Requerimiento de información y documentación a Facebook Inc.

- a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7174/2019, se requirió a Facebook Inc., informara si la URL denunciada fue pautaada.
- b) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, Facebook Inc., informó que la URL investigada no está ni estuvo asociada con una campaña publicitaria.

XV. Requerimiento de información y documentación al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez (Pablo Montero).

- a) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7405/2019, se requirió al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez informara el motivo de su participación en el video investigado; sin embargo, no se localizó en el domicilio señalado, levantándose el Acta circunstanciada correspondiente.
- b) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8414/2019, se requirió al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, informara el motivo de su participación en el video denunciado; sin embargo, no se localizó en el domicilio proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, levantándose el Acta circunstanciada correspondiente.

XVI. Requerimiento de información y documentación al Representante Legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V.

- a) Mediante Acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, requiriera al Representante Legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., a efecto que informara el motivo por el cual contrató los servicios del restaurante "la Saturnina", como locación para la grabación del video denunciado, así como remitiera la documentación legal y contable que respaldara su dicho. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0490/2019, el treinta de mayo de dos mil diecinueve.
- b) El uno de junio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, el Representante legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística,

S.A. de C.V., informó que su representada contrató un desayuno de trabajo en el restaurante “La Saturnina” en el que coincidentemente se llevó a cabo una actividad en dicho lugar por parte del candidato integrante de la empresa, informando que por un “error”, el personal del restaurante confundió las facturas que amparaban los dos distintos eventos, enviando a la autoridad la que correspondía al desayuno de trabajo de la empresa. A su escrito no adjuntó documentación alguna.

- c) Mediante Acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, requiriera al Representante Legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., a efecto que remitiera la documentación soporte correspondiente a la renta del restaurante por la contratación del desayuno de trabajo. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0574/2019, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- d) El veintitrés de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Representante Legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., informó que la factura número 14461, ampara el desayuno de su representada, distinto al evento de la grabación del video investigado. A su escrito de respuesta adjuntó copia simple del anverso y reverso de su credencial para votar, así como el Poder notarial que acredita su personalidad.

XVII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización.

- a) El treinta y uno de mayo y trece de junio de dos mil diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/465/2019 e INE/UTF/DRN/530/2019, respectivamente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, a efecto que solicitara al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el domicilio fiscal del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez.
- b) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0710/2019, la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, remitió el oficio de respuesta de la autoridad tributaria así como la Constancia de Situación Fiscal correspondiente al ciudadano investigado.

XVIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

- a) El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/529/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara el costo de conformidad con el precio más alto registrado en la matriz de precios respecto de los conceptos denunciados.
- b) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0833/19, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada.

XIX. Razones y Constancias.

- a) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito el domicilio del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, derivado de una consulta en el sistema COMPARTE, relativa al domicilio proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto.
- b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual realizó una búsqueda en internet a fin de verificar la existencia y contenido del video denunciado en la red social Facebook.
- c) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, correspondiente al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez.
- d) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la respuesta remitida mediante correo electrónico, en atención al oficio INE/JLE/VE/0490/2019, redactada por el Representante Legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V.
- e) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la información publicada en la página de internet de IBN Industrias Militares y

de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., y en la que se identifica al C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, como fundador de dicha empresa.

- f) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la información y documentación reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, consistente en una póliza relacionada con los gastos denunciados.
- g) El dos de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la información y documentación de los resultados de la búsqueda en internet de diversas agencias de contratación de artistas y las cotizaciones obtenidas respecto del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias "Pablo Montero".

XX. Acuerdo de Alegatos.

El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, una vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, en relación con el 41, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas.

XXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena.

- a) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8428/2019, se notificó al Representante propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
- b) El veintidós de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Representante propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, formuló alegatos en el sentido de afirmar que los gastos denunciados se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, motivo por el cual se debe declarar infundado el procedimiento de mérito.

XXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al candidato denunciado.

- a) Mediante Acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Aguascalientes de este Instituto, notificar la apertura de la etapa de alegatos al C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, en su carácter de denunciado, correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLE/VE/0576/2019, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- b) El veintitrés de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el candidato denunciado emitió sus alegatos en el sentido de confirmar la realización del video investigado, afirmando que no se realizó pronunciamientos referentes a solicitar el voto a favor o en contra de candidato alguno, realizado a título de persona física, pues el artista Pablo Montero es su amigo desde hace más de diez años, y que los gastos efectuados por la realización del video fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. A su escrito adjuntó copia simple del anverso y reverso de su credencial para votar.

XXIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos al quejoso.

- a) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8427/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura de la etapa de alegatos al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en su carácter de quejoso, correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
- b) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, formuló alegatos en el sentido de afirmar que, de las constancias que integran el expediente de mérito quedó acreditado que los sujetos incoados recibieron una aportación de una persona con actividades empresariales como lo es el artista Pablo Montero, y en la omisión de reportar el video denunciado y los gastos derivados de este.

XXIV. Cierre de instrucción. El uno de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue resuelto en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el dos de julio de dos mil diecinueve, ordenando la modificación del costo a valuación de los honorarios del artista Pablo Montero, para determinar un valor más cercano al valor de su actuación. Lo anterior fue aprobado en lo general por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes integrantes de dicha Comisión: la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; y los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández.

En lo particular se aprobó el porcentaje de 25% (veinticinco por ciento) de la reducción de la ministración para la imposición de la sanción, y el uso de la matriz de precios, por tres votos a favor de los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia.

Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de Fondo.

Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento, el cual consiste en determinar si Morena y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Aguascalientes, omitieron rechazar una aportación de persona física con actividad empresarial y/o de persona prohibida por la normatividad electoral, consistente en la producción de un video publicado en la red social Facebook, el 04 de mayo de 2019, denominado *“Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Anaya”*, los honorarios del artista Pablo Montero y/o Oscar Daniel Hernández Rodríguez, contratación del mariachi que lo acompañó, así como la renta del restaurante “La Saturnina” utilizado para la grabación del video y, derivado de lo anterior, y derivado de ello, un presunto rebase al tope de gastos de campaña establecidos.

Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 121, numeral 1, inciso i); 127 del Reglamento de Fiscalización; y 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

- 1. Son obligaciones de los partidos políticos:***
(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...)

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

(...)

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes

(...)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...).

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 121.

Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

(...)

*i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(...)”.*

“Artículo 127.

Documentación de los egresos.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)”.

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.

De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el registro contable de los ingresos y egresos es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.

De igual manera, las premisas normativas citadas establecen un catálogo de personas a las cuales la normativa les señala la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener, y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

La normatividad en comento establece la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de, entre otros, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.

Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohiba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, transgrediendo el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.

Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el influjo de elementos diversos a los democráticos.

Así mismo, de las premisas normativas se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de la obligación de respetar los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad.

En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes asignados para campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión de cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos políticos, el cumplir con los topes de gastos establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.

En resumen, dichos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral

conlleve, con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, presentó escrito de queja en contra de Morena y el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, denunciando la presunta aportación prohibida realizada por el artista conocido como Pablo Montero y/o Oscar Daniel Hernández Rodríguez, consistente en un video publicado en la red social Facebook el 04 de mayo de 2019, denominado *“Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Anaya”*, así como los gastos no reportados por concepto de producción del video, los honorarios de Pablo Montero, los honorarios del mariachi, y la renta del restaurante “La Saturnina” donde se grabó el video y, derivado de lo anterior, un presunto rebase al tope de gastos de campaña a favor de los denunciados.

A su escrito de respuesta adjuntó como medios probatorios 12 capturas de pantalla en las que se observan el contenido del video denunciado, así como las páginas de internet que ofreció como pruebas, 1 URL que corresponde al perfil de Facebook en el que se publicó el video, 2 URLs que corresponden a la página del portal Wikipedia y de la red social Instagram en donde aparece la biografía y el perfil del artista conocido como Pablo Montero, 1 URL de la página de internet Tripadvisor en donde aparecen las instalaciones del restaurante “La Saturnina”, y un disco compacto con el video denunciado.

Cabe señalar que las pruebas consistentes en el video, las imágenes y las URLs ofrecidas por el quejoso, para sustentar sus afirmaciones, constituyen pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben administrarse con más elementos para hacer prueba plena.

Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014, misma que se transcribe a continuación:

***“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los***

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

En razón de lo anterior, la autoridad instructora consideró procedente admitir e iniciar el procedimiento de queja de mérito, a efecto de emplazar a los incoados y requerir la información y documentación correspondiente.

En respuesta a los emplazamientos realizados, Morena y el candidato denunciado señalaron que aun se encontraban en tiempo para realizar los reportes de gastos de campaña como lo marca el calendario de fiscalización, por lo que los hechos denunciados no son definitorios, no existiendo la omisión de reportar gastos. Relativo al rebase de tope de gastos campaña señalaron que, conforme al criterio de la Sala Superior, el rebase de tope de campaña debe tratarse de una irregularidad plenamente acreditada, lo cual no acontece en el caso pues lo denunciado son apreciaciones subjetivas y presuntivas. Refirieron que las pruebas aportadas por el quejoso resultan subjetivas, sin que se desprenda la presunta aportación indebida y omisión de reportar gastos, señalando que lo expuesto son meros indicios que carecen de valor probatorio. Finalmente, señalaron que en ningún momento han recibido aportación indebida por ente prohibido. A sus respectivos escritos de respuesta no adjuntaron pruebas.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS**

En este orden de ideas, el análisis de los hechos denunciados se realizará en el orden siguiente:

3. Gastos por la producción de spot y publicidad en la red social Facebook.

La autoridad fiscalizadora solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto, certificar la existencia y contenido de las direcciones de internet aportadas por el quejoso. En respuesta, la Directora del Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral remitió el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/72/2019, de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se practicó la certificación del contenido de las páginas de internet solicitadas.

De igual manera, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó razón y constancia de la existencia y contenido del video denunciado publicado en la red social Facebook, del cual se desprende lo siguiente:

Descripción	Fecha de publicación	Muestra	Contenido
<p>Video que se titula "Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Anaya", publicado en la página de Facebook "Palestra Aguascalientes" que corresponde a la participación de Pablo Montero y/o Oscar Daniel Hernández Rodríguez, en favor de la candidatura del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, con quien aparece cantando en un restaurante, acompañados de un grupo mariachi.</p> <p>Enlace: https://www.facebook.com/PalestraAguascalientes/videos/vb.133858059985076/180402156180841/?type=2&theater </p>	04 de mayo de 2019		<p>Encabezado del video:</p> <p><i>"Pelea de Gallos: Pablo Montero y Arturo Ávila Anaya La Saturnina, Calle Carranza en el Centro Histórico de Aguascalientes. Vimos Este Video en las Pantallas del Merendero San Pancho y al Final Logramos Conseguirlo. ¡¡¡Se Hubieran Subido a Cantar con Becky G!!!"</i></p> <p>En el que se observa a Pablo Montero decir lo siguiente:</p> <p><i>"¿Qué tal amigos?, les habla Pablo Montero y yo siempre que vengo aquí a la feria de San Marcos; la gente me trata con mucho cariño; yo tengo aquí un amigo, un amigo trabajador, un amigo luchador y un día me prometió que si llegara a ser alcalde, él va a hacer el cambio, él se llama Arturo Ávila, es más yo sé dónde le gusta ir a desayunar, lo voy a ir a buscar y lo voy a invitar a cantar, ¿me acompañan?"</i></p> <p>Inicio una canción de Pablo Montero con Arturo Ávila acompañados de mariachi: <i>"A la feria de San Marcos del merito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón; y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos con su público braver, con sus chorros de dinero y los gritos del griton; retozándose de gusto no se sienten</i></p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS**

Descripción	Fecha de publicación	Muestra	Contenido
			<p><i>ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita!, que hasta el alma grita, con todas sus fuerzas: ¡viva Aguascalientes! ¡viva! que su feria es un primor. Ora Pablito no te rajes canseo (sic), Órale compadrito Arturo, no se me raje."</i></p> <p>Entre las escenas de la canción, se van insertando imágenes alusivas a lugares conocidos de Aguascalientes y la Feria Nacional de San Marcos. Al final del video aparece una leyenda con letras guindas que dice: "UN REGALO PARA MI QUERIDO AGUASCALIENTES Y PARA MI GRAN AMIGO ARTURO ÁVILA" "PABLO MONTERO FNSM 2019". La duración del video es de dos minutos con cuarenta y un segundos.</p>

Del análisis del vídeo, pueden identificarse las siguientes características:

- Se trata de un video publicado en el perfil de la red social Facebook denominado "Palestra Aguascalientes".
- Fue publicado el 04 de mayo de 2019.
- La duración del video es de dos minutos con cuarenta y un segundos (00:02:41).
- En el video se observa al artista Pablo Montero enviando el siguiente mensaje: **"...yo tengo aquí un amigo, un amigo trabajador, un amigo luchador y un día me prometió que si llegara a ser alcalde, él va a hacer el cambio, él se llama Arturo Ávila..."**.

Asimismo, del análisis al contenido del video esta autoridad considera que reúne las características para ser considerado como un gasto de campaña que benefició la candidatura del candidato denunciado, de conformidad con los criterios contenidos en la Jurisprudencia 37/2010¹, y Tesis relevante LXIII/2015², toda vez que se acredita la existencia de los elementos mínimos (subjetivo, objetivo, temporalidad y territorialidad), para considerar la publicación como un gasto de campaña, a saber:

¹ Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32.

² Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89.

- **Territorialidad.** Fue difundido en todo el país al haberse colocado en una página de internet, por tratarse de un mecanismo informático al que se tiene acceso en toda la República Mexicana, destacando que la publicación se realizó en un medio dirigido en especial a la población de Aguascalientes.
- **Temporalidad.** La difusión del video fue a partir del 04 de mayo de 2019, durante el periodo de campaña; que en el municipio de Aguascalientes (15 de abril - 29 de mayo de 2019).
- **Finalidad.** La participación del artista Pablo Montero, quien es un reconocido artista en el ámbito musical nacional, se realiza en torno al candidato denunciado y el cargo por el cual se postuló, exaltando cualidades de su persona, mediante el siguiente mensaje *“...les habla Pablo Montero y yo siempre que vengo aquí a la feria de San Marcos; la gente me trata con mucho cariño; yo tengo aquí un amigo, un amigo trabajador, un amigo luchador y un día me prometió que si llegara a ser alcalde, él va a hacer el cambio, él se llama Arturo Ávila...”*.

Por otra parte, al final del video denunciado se puede advertir el mensaje: **“UN REGALO PARA MI QUERIDO AGUASCALIENTES Y PARA MI GRAN AMIGO ARTURO ÁVILA” “PABLO MONTERO FNSM 2019”**, en letras color guinda; mensaje que en el contexto de la campaña política en que se difundió y por sus características acredita que la intención de dicho video es **difundir la imagen y nombre del candidato así como promover el voto en su favor**, generando un beneficio a su campaña política al ser publicado en el periodo de campaña y difundido en la red social Facebook.

Así, en el caso a estudio se colman los tres elementos para que los gastos relativos a dicho video sean considerados como gastos de campaña, dado que con esa publicación se pretendió colocar en las preferencias del electorado al candidato postulado por Morena.

En razón de lo anterior, se solicitó a Facebook Ireland Limited, informara si la URL denunciada fue pagada; empresa que informó que la URL del video investigado no estuvo asociada con alguna campaña publicitaria.

Por otro lado, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, informara si el video denunciado tenía características de producción, así como si correspondía a los pagados por Morena para la candidatura del candidato denunciado; la cual informó que el video denunciado contiene

producción semi-profesional a profesional con las siguientes características: calidad de video para transmisión *broadcast*, producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad, asimismo señaló que, el material no se identificó con alguno de los pautados por Morena, a favor del candidato incoado.

En consecuencia, la autoridad fiscalizadora con base en sus facultades de vigilancia y fiscalización, verificó la contabilidad de los sujetos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de la póliza registrada en la contabilidad del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, en la que se identificó el reporte de la aportación de la producción del video publicitario, a saber:

Póliza	Periodo	Tipo	Subtipo	Descripción	Documentación Soporte	Costo
5	1	Corrección	Diario	Aportación de video publicitario Pablo Montero	Contrato de donación pura y simple para campaña celebrado entre Morena y el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias "Pablo Montero", de 20 de mayo de 2019, y anverso y reverso de la credencial de elector del aportante.	\$ 25,000.00

Respecto de la documentación adjunta en la póliza descrita conviene precisar:

1. El contrato de donación pura y simple, fue celebrado entre Morena, representado por el Lic. Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, en su calidad de Delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Aguascalientes, como donatario y, por la otra el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias "Pablo Montero" como donante.
2. El objeto del contrato es *"otorgar en donación el derecho de uso de un paquete de servicios de propaganda electoral consistentes en 1 videoclip con duración de 2 minutos y 40 segundos (...) en el Municipio de Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes, y conforme a los lugares que precise "EL DONATARIO", incluyendo la toma de imágenes, audio, video, grabación, producción y edición, tomando en cuenta que la producción y edición, se hicieron tomando escenas, imágenes y gráficos del dominio público por un importe de \$25,000.00"*

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para la campaña del candidato Arturo Federico Ávila Anaya para la presidencia municipal del municipio de Aguascalientes en el Proceso Electoral 2018-2019.”³ [Énfasis añadido].

3. El valor de los servicios donados de acuerdo al contrato es de \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
4. El contrato fue suscrito el 20 de mayo de 2019, con una adenda de fecha 27 de mayo del año en curso.
5. Se acompaña credencial de elector del donante.

De la descripción de la documentación adjunta en la póliza reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, se identifica que esta corresponde a los gastos denunciados por concepto de **producción del video**, toda vez que el contrato de donación fue suscrito por el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias Pablo Montero, por la grabación de un video de “propaganda electoral” con duración de dos minutos y cuarenta segundos que incluye toma de imágenes, audio, video, grabación, producción y edición, es decir, en términos generales los gastos de producción inherentes al mismo.

Es menester señalar que la documentación proporcionada por la empresa Facebook Ireland Limited constituye una prueba documental privada, en términos del artículo 16, numeral 2; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3 del citado reglamento, se les otorga un valor indiciario simple, sin embargo al ser administradas con la documentación proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de este Instituto Nacional Electoral, así como las razones y constancias levantadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, adquieren valor probatorio pleno, con base en las cuales este Consejo General tiene certeza de lo siguiente:

- El gasto por concepto de producción de spot, fue reportado como una aportación en especie, en el informe de campaña del candidato denunciado por parte del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero”.
- La URL del video investigado no estuvo asociada con alguna campaña publicitaria, razón por la cual no existe obligación de los sujetos obligados de reportar el gasto denunciado.

³ Conforme a la adenda del contrato original suscrita por las partes el 27 de mayo de 2019, y que se acompañada al contrato reportado como evidencia en la póliza correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierte la existencia de elementos para acreditar una vulneración a lo previsto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, los hechos analizados en el presente considerando se deben declarar **infundados**.

4. Aportación de persona física con actividad empresarial (honorarios por la actuación del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero” y contratación de mariachi).

Acreditado que el video contiene propaganda electoral a favor del candidato denunciado y que en su grabación intervino el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero, la autoridad instructora procedió a solicitar a la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección Jurídica del Instituto, remitiera el domicilio del ciudadano de mérito la cual informó que localizó más de un registro coincidente.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de localizar su domicilio, obteniendo un registro coincidente, levantando razón y constancia de ello, y al cual se procedió a requerir con la finalidad de que informara el motivo de su participación en el video denunciado, remitiera el contrato y demás documentación legal de su participación en dicho video, sin embargo, el ciudadano no fue localizado en el domicilio, levantándose el Acta circunstanciada correspondiente.

No obstante lo anterior, en cumplimiento del principio de exhaustividad que debe regir el procedimiento, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo que, por su conducto, solicitara al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el domicilio fiscal del multicitado ciudadano. En respuesta, la autoridad tributaria remitió un domicilio distinto, al cual acudió personal de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de requerir al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, sin embargo, en dicho domicilio tampoco fue localizado, levantando el Acta circunstanciada correspondiente.

Adicionalmente, la autoridad fiscalizadora con base en sus facultades de vigilancia y fiscalización, verificó la contabilidad de los sujetos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de la póliza registrada en

la contabilidad del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, en la que se identificó el reporte de la aportación de un video publicitario cuya póliza fue descrita en el considerando que precede, más no así a los gastos correspondientes por concepto de **honorarios de Pablo Montero y contratación del grupo de mariachi** que lo acompañó.

No pasa desapercibido para esta autoridad la respuesta proporcionada por la Representante legal del restaurante “La Saturnina”, quien informó que el día 29 de abril, alrededor de las diez de la mañana, llegó al restaurante un mariachi de 6 integrantes, que se retiró a las 10:45 horas, mismo que **no amenizó, solo actuó** en el video grabado, lo que confirma la participación del grupo mariachi y, por ende, un gasto que tuvo que ser reportado en el informe de campaña correspondiente.

Es importante señalar que el candidato denunciado, emitió sus alegatos en el sentido de confirmar la realización del video investigado, afirmando que no se realizó pronunciamiento alguno solicitando el voto a favor o en contra de candidato alguno, el cual fue realizado a título de persona física, toda vez que el artista Pablo Montero es su amigo desde hace más de diez años, y que los gastos efectuados por la realización del video fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

En razón de lo anterior es dable concluir que si bien es cierto el gasto por la producción fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, los honorarios del artista, al tratarse de según el dicho del candidato de un “*amigo*” se traduce en una aportación de persona física con actividad empresarial toda vez que de conformidad con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, el C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero”, es una persona registrada ante la citada autoridad como persona física con actividad empresarial; la cual en términos de lo establecido en el artículo 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, tiene prohibición realizar aportaciones a los partidos políticos, toda vez que su actividad es comercial, y se considera con fines de lucro, máxime que precisamente su aportación consistió en su actuación, actividad ordinaria a la cual se dedica el artista.

Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en el expediente SUP-JDC-36/2019, cuya parte conducente se cita a continuación:

“(…)”

Así, en el artículo 54 de ese ordenamiento legal, se previó lo siguiente:

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, **en dinero o en especie**, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

(...)

f) **Las personas morales**, y

(...)

Lo relevante para los efectos de esta Resolución es que en la redacción de la nueva lista se incluyó “personas morales” en sustitución de “empresas mexicanas de carácter mercantil”.

El cambio en la redacción de la lista de entes que no pueden hacer aportaciones puede interpretarse de dos formas:

1. Que el legislador consideró que dentro del concepto “personas morales” quedan comprendidas las empresas mexicanas de carácter mercantil y que ello abarca, a su vez, a las personas físicas con actividad empresarial.
2. Que el legislador quiso establecer la prohibición de hacer aportaciones exclusivamente para las personas morales mexicanas, pero no para las personas físicas, independientemente de su actividad.

La Sala Superior considera que la interpretación que debe prevalecer es la relativa a que dentro de la expresión “personas morales” contenida en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos se encuentran comprendidas las empresas mexicanas de carácter mercantil, que comprenden, a su vez, a las personas físicas con actividad empresarial, porque (i) esa interpretación es la que resulta conforme con el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, (ii) en los procesos legislativos no hay evidencia de que el legislador haya tenido la intención de permitir que las empresas mexicanas de carácter mercantil -en cuyo concepto encuadran las personas físicas con actividad empresarial- hagan aportaciones a los partidos políticos y (iii) existe al menos una disposición expresa que revela la intención del legislador de prohibir que las empresas mexicanas de carácter mercantil hagan aportaciones para cuestiones político-electorales,

(...)

Sentado lo anterior, debe decirse que las **personas físicas con actividades empresariales** encuadran en el concepto “empresa mexicana con actividad mercantil”, toda vez que su actividad es comercial, y se considera con fines de lucro.

Al respecto, este Alto Tribunal en materia electoral **refrenda el criterio sustentado al respecto por su anterior integración** al resolver, entre otros, el recurso de apelación **SUP-RAP- 76/2014**, toda vez que, una interpretación sistemática y funcional del artículo 3, fracciones I y II, del Código de Comercio, en relación con el diverso 16, parte final, del Código Fiscal de la Federación, permite establecer válidamente que, para considerar a un ente jurídico como una "empresa" **es irrelevante que éste sea una persona física o moral**, pues lo verdaderamente importante es que, de conformidad con la normatividad aplicable, realice actividades de carácter **comercial**.
(...)

De las porciones normativas transcritas, puede concluirse que las **personas físicas con actividad empresarial** son individuos con capacidad legal para contraer obligaciones y ejercer derechos en materia de comercio, como prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles, exportar, importar, realizar actividades financieras, invertir en sociedades, recibir dividendos, y realizar cualquier actividad que no se encuentre prohibida por la ley, así como realizar actividades comerciales que impliquen la compra y venta de bienes, a cambio de una **ganancia o lucro** para quien la realiza.

Así, adversamente a lo sostenido por la organización accionante, cuando se habla de una "empresa mexicana de carácter mercantil" **puede referirse a una persona física con actividad empresarial**, o bien a una persona moral, **indistintamente**.

Esto, porque el concepto de empresa **no es un sinónimo** de persona moral, como se pretende hacer ver en los agravios.

Con apoyo en lo antedicho, esta Sala Superior considera que la prohibición establecida por la autoridad responsable, que impedirá a las organizaciones de ciudadanos que pretendan su registro como Partido Político Nacional, recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, **es apegada a Derecho**, en tanto que ese tipo de entes encuadran en el concepto de **empresa de carácter mercantil**, como se apuntó, debido a que de forma ordinaria realizan como actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, **actos de comercio con fines lucrativos**.

Al respecto, en el Diccionario de la Real Academia Española se define como **empresa** a una unidad de organización que se ocupa en realizar actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. De este modo, esa unidad de organización puede ser conformada tanto por personas físicas como por personas morales y, en ambos casos, será considerada empresa.

*Lo expuesto resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 16, in fine, del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de considerar como empresa a toda **persona física o moral** que **realiza actividades empresariales**; de lo que se concluye que **lo destacadamente importante es la actividad empresarial que realizan** y no el tipo de persona (física o moral) que lleva a cabo la actividad.*

*De igual forma, con lo establecido en el artículo 3, fracciones I y II, del Código de Comercio, conforme a las cuales **se consideran comerciantes las personas** (físicas o morales) que tienen capacidad legal para ejercer el comercio, **y hacen de éste su ocupación ordinaria**.*

Es decir, el elemento relevante de la prohibición que se analiza es la actividad empresarial y tomando en consideración que esa actividad puede ser realizada tanto por personas físicas como por personas morales, se llega a la conclusión de que ambos tipos de personas se encuentran impedidas para realizar aportaciones a las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos.

De acuerdo con lo que se ha expuesto, la prohibición contenida en el acuerdo impugnado, en el sentido de que las asociaciones que pretenden constituirse como partidos políticos tienen prohibido recibir aportaciones de personas físicas con actividad empresarial no excede la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que es acorde con las disposiciones constitucionales y legales que regulan el financiamiento privado de los partidos políticos.

*Con apoyo en lo hasta aquí expuesto, **deviene infundado** el agravio en el que la organización actora sostiene que el Consejo General responsable **excedió su facultad reglamentaria** al establecer la prohibición de que las asociaciones que tienen la intención de constituirse como partidos políticos reciban aportaciones de personas físicas con actividad empresarial.*

(...)"

Es menester señalar que la documentación proporcionada por el candidato denunciado y por la Representante legal del restaurante "La Saturnina", constituyen pruebas documentales privadas en términos del artículo 16, numeral 2; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3 del citado reglamento, se les otorga un valor indiciario simple, sin embargo al ser adminiculadas con la documentación proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria adquieren valor

probatorio pleno, con base en las cuales este Consejo General tiene certeza de que Morena omitió rechazar una aportación en especie por parte de una persona física con actividad empresarial consistente en los honorarios del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero”, así como del grupo de mariachis que lo acompañó durante la filmación del video que promovió su candidatura.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General advierte la existencia de elementos para acreditar una vulneración a lo previsto en el artículo 25, numeral 1, inciso i); con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, los hechos analizados en el presente considerando se deben declarar **fundados**.

5. Aportación de persona moral (locación para la realización del video)

Siguiendo con la línea de investigación se requirió al Representante Legal del restaurante “La Saturnina” a efecto que informara si las instalaciones del restaurante fueron utilizadas como locación para la realización del video investigado y, en su caso, remitiera la documentación legal y contable por la utilización del inmueble y los servicios que incluyó.

En respuesta, el referido Representante Legal señaló que el 28 de abril del año en curso, se recibió una llamada para solicitar la reservación del restaurante así como la contratación del servicio de buffet para 50 personas, para el día 29 de abril de 2019, a las 9.00 A.M. aclarando que la persona que realizó la reservación consultó si habría inconveniente en que usaran el primer patio del restaurante para la grabación de un video del cantante Pablo Montero, respondiendo que sería un honor que dicho artista visitara sus instalaciones; y que lo anterior no tendría costo extra, toda vez que el servicio de buffet incluía el uso de las instalaciones.

Asimismo, precisó que el costo de buffet fue de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), con Impuesto al Valor Agregado incluido, por persona, por lo que el costo total del desayuno contratado fue de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); respecto al mariachi informó que, el día del desayuno, alrededor de las diez de la mañana llegó al restaurante un mariachi de 6 integrantes, que se retiró a las 10:45 horas, los cuales no amenizaron, solo actuaron, sin conocer el nombre del conjunto o su propietario. Indicó que por el servicio de buffet contratado se emitió la factura número 14461, a favor de la persona moral IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., por concepto “*CONSUMO DE ALIMENTOS 29 DE ABRIL 2019*”, por un monto total de \$9,999.99 (nueve mil novecientos noventa

y nueve pesos 99/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, de la cual remitió copia simple.

Así, de la información y documentación aportada por el restaurante “La Saturnina”, y teniendo como indicio la factura en comento, se requirió al Representante Legal de la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., informara el motivo de la contratación de los servicios del restaurante “La Saturnina” para la realización del video investigado, remitiendo la documentación comprobatoria correspondiente.

En respuesta, el 01 de junio de 2019, mediante correo electrónico institucional se recibió la respuesta del Representante legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., señalando que el día 29 de abril del año en curso, su representada llevó a cabo un desayuno de trabajo en el citado restaurante y que, coincidentemente se llevó a cabo una actividad en ese sitio por parte del candidato integrante de la empresa y que, en virtud de ello, el restaurante confundió las facturas que amparaban los dos distintos eventos y por error envió a la autoridad la que correspondía al desayuno de trabajo de la empresa. Adicionalmente, señaló que su representada no contrató los servicios del artista Pablo Montero ni el grupo mariachi, y precisó que el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, es el Representante legal de la empresa. A su escrito no adjuntó documentación alguna, por lo cual la autoridad instructora levantó razón y constancia. Cabe destacar que a la fecha de aprobación de la presente Resolución no se recibió la respuesta física con firma autógrafa del correo en comento.⁴

Adicionalmente, la autoridad fiscalizadora procedió a la verificación de la página de internet de la persona moral IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., en la que se identificó el reconocimiento público del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, como Director Ejecutivo y fundador de la empresa en el año 2002, procediendo a levantar la razón y constancia correspondiente.

En razón de lo anterior, y a efecto de tener certeza respecto de los hechos materia de Litis, la autoridad fiscalizadora requirió de nueva cuenta al restaurante “La Saturnina”, a efecto que confirmara o rectificara si la factura número 14461, corresponde al evento en el que se realizó la grabación del video denunciado de

⁴ En este sentido, se valora la respuesta recibida por correo electrónico, conforme al criterio fijado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SM-RAP-203/2018, en la que estableció: “(...), si la autoridad administrativa electoral permite a los denunciantes dentro del proceso sancionador derivado de irregularidades en la fiscalización, desahogar las vistas por medios electrónicos, estas deberán ser objeto de algún pronunciamiento al momento de emitir la resolución correspondiente, pues, la autoridad administrativa electoral es la que otorgó al denunciante la posibilidad de presentar sus manifestaciones por esa vía”.

cuya respuesta se advierte que la Representante legal reiteró que la factura en comento fue emitida a solicitud del personal que labora con el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya a nombre de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., y corresponde al consumo de alimentos del 29 de abril de 2019, durante el cual se realizó la grabación del video investigado adjuntando copia simple del recibo de reservación para eventos número 0770, el cual en su descripción señala “Grabación del spot del cantante Pablo Montero”, de fecha 29 de abril, y copia simple del boucher de pago por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

De igual forma, se requirió al Representante legal de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., a fin de que, derivado de su primer respuesta, remitiera la documentación soporte correspondiente a la renta del restaurante por la contratación del desayuno de trabajo. En respuesta, precisó que la factura número 14461 corresponde al evento llevado a cabo por su representada, distinto al que se le pretende asignar la grabación del video investigado, enviada erróneamente por el restaurante a la autoridad fiscalizadora.

De la revisión a la contabilidad del candidato incoado en el Sistema Integral de Fiscalización, no se advierte reporte alguno del gasto o aportación derivado del uso del restaurante “La Saturnina” para la grabación del video denunciado, sin embargo, de las diligencias realizadas, la Representante Legal del restaurante afirmó que fue personal que labora con el candidato incoado quien solicitó la emisión de la factura 14461, a favor de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., así como la reservación de las instalaciones del inmueble para la realización de un desayuno para 50 personas, preguntando si habría problema si se ocupaban sus instalaciones para la grabación de un video con la participación de Pablo Montero y, de ser el caso, cuál sería el costo extra, a lo que el personal del restaurante informó que **no habría costo extra pues la contratación del servicio de buffet incluía la utilización de sus instalaciones.**

Por otra parte, el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, en su calidad de Representante legal de la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., señaló que el evento realizado por el candidato fue independiente del realizado por la empresa, **siendo coincidencia que en esa fecha se realizó la grabación del video denunciado**, y que la factura que se hizo llegar a la autoridad corresponde a su evento, no así al de la realización del video denunciado.

En este sentido, esta autoridad considera que no le asiste la razón al representante de Representante Legal de la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., toda vez que el Representante legal es a su vez el candidato incoado, aunado a que tal y como quedó precisado en párrafos que anteceden, la reservación y por ende, la contratación del restaurante se realizó por concepto de “Grabación del spot del cantante Pablo Montero”, de ahí que no sea posible darle un valor probatorio alguno.

Adicionalmente, el Representante de la empresa multicitada no adjuntó medio probatorio que acreditara su dicho.

Por lo anterior, este Consejo General concluye que, para que los sujetos incoados pudieran beneficiarse de la donación que realizó el artista Pablo Montero a la campaña del candidato denunciado, fue necesario contratar el servicio de buffet que ofrece el restaurante “La Saturnina”, pues el servicio de alimentos incluyó el uso de las instalaciones, y se tiene acreditado que dicho servicio fue pagado por la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., misma que fue fundada por el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, que actualmente es su Representante legal y otrora candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, postulado por Morena.

Es decir, para que pudiera realizarse la grabación, edición, y la participación del artista Pablo Montero en el video denunciado, la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., contrató el servicio de Buffet para 50 personas, del cual se beneficiaron los sujetos incoados, toda vez que sin dicha contratación, no hubiese sido posible utilizar el inmueble del restaurante como locación para el video, hechos con los cuales se acredita que los sujetos investigados recibieron una aportación en especie de una persona prohibida por la normatividad electoral, misma que benefició a su campaña.

Es menester señalar que la documentación proporcionada por el candidato denunciado y por la Representante legal del restaurante “La Saturnina” así como por la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., constituyen pruebas documentales privadas en términos del artículo 16, numeral 2; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numerales 2 y 3 del citado reglamento, se les otorga un valor indiciario simple, sin embargo al ser adminiculadas con las razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización adquieren valor probatorio pleno, con base en las cuales este Consejo General tiene certeza de que Morena omitió rechazar una aportación en especie por parte de la empresa IBN

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., consistente en la contratación del restaurante “La Saturnina”, lugar en el que se llevó a cabo la grabación de un video que contenía propaganda electoral a favor del candidato denunciado por un monto de \$9,999.00.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General advierte la existencia de elementos para acreditar una vulneración a lo previsto en el artículo 25, numeral 1, inciso i); con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; en consecuencia, los hechos analizados en el presente considerando deben declararse **fundados**.

Finalmente, realizadas las diligencias necesarias, el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue notificado a las partes involucradas.

En respuesta, el Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en su calidad de quejoso, formuló alegatos en el sentido de afirmar que, de las constancias que integran el expediente de mérito quedó acreditado que los sujetos incoados recibieron una aportación de una persona con actividades empresariales como lo es el artista Pablo Montero, y en la omisión de reportar el video denunciado y los gastos derivados de este.

Por su parte, el Representante propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, formuló alegatos en el sentido de afirmar que los gastos denunciados se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, motivo por el cual se debe declarar infundado el procedimiento de mérito.

Por lo que hace al candidato denunciado, emitió sus alegatos en el sentido de confirmar la realización del video investigado, afirmando que no se realizó pronunciamientos referentes a solicitar el voto a favor o en contra de candidato alguno, realizado a título de persona física, pues el artista Pablo Montero es su amigo desde hace más de diez años, y que los gastos efectuados por la realización del video fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, argumentos que no desvirtúan lo argumentado a lo largo de la presente Resolución.

6. Determinación del costo.

Se procede a cuantificar de las aportaciones acreditadas solicitando a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, informe el precio más alto

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

registrado en la matriz de precios respecto de las mismas. De este modo, la citada Dirección informó lo siguiente:

A) Honorarios del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero”.

Respecto a este concepto, la Dirección de Auditoría remitió la siguiente matriz de precios:

Entidad	Concepto	Valor unitario con IVA	Cantidad
DURANGO	CONTRATACIÓN DEL TAMBORAZO SAN ESTEBAN POR 3 HORAS 1100.00 POR HORA Y CANTANTE ALEJANDRA BARRAZA GUERECA POR 2 HORAS 500.00 POR HORA	\$4,300.00	1
DURANGO	CONTRATACIÓN DEL TAMBORAZO SAN ESTEBAN POR 3 HORAS 1100.00 POR HORA Y CANTANTE ALEJANDRA BARRAZA GUERECA POR 2 HORAS 500.00 POR HORA	\$4,300.00	1
PUEBLA	PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN ARTISTA GABINO PALOMARES	\$11,600.00	1
QUINTANA ROO	ARTISTA CÓMICO PAQUETE DE SERVICIO DE EVENTOS DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS PRIMERA, SÉPTIMA Y DEMÁS APLICABLES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE	\$2,320.00	1
TAMAULIPAS	DUETO MUSICAL PARA DÍA DE LAS MADRES	\$499.99	1
AGUASCALIENTES	COMPOSICIÓN, ARREGLOS, CANTANTES Y GRABACION CANCION JUANJO LOZOYA	\$7,540.00	1

De lo anterior se advierte que de la matriz proporcionada en el estado de Puebla se considera un precio de \$11,600.00 por concepto de presentación del artista Gabino Palomares cuyo precio representa el valor más alto de la matriz de precios.

No obstante lo anterior se considera que la matriz de precios elaborada no corresponde con las condiciones y características propias de la actuación del artista conocido como “Pablo Montero” en atención a que es una figura pública artística con alto reconocimiento a nivel nacional, cuyos requerimientos de participación en eventos no son comparables con los de los eventos artísticos considerados en la matriz de precios en comento, siendo importante aclarar que durante el Proceso Electoral 2018-2019, no fue reportado gasto alguno relacionado con la participación de un artista de fama pública en el mismo, razón por la cual no fue posible que en

la matriz de precios elaborada, se identificara un importe similar a los honorarios del citado artista “Pablo Montero”.

Ahora bien, es menester señalar que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 27 prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, **valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”** previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los numerales 1, 2 y 3, del artículo 27, del citado Reglamento, se debe entender como el “valor razonable”, el que resulte de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.⁵

En el caso concreto, el artista “Pablo Montero” es una figura pública reconocida artísticamente a nivel nacional, motivo por el cual, los costos por los servicios que integran la matriz de precios proporcionada por la Dirección de Auditoría no son comparables con el costo y beneficio real que los sujetos obligados obtuvieron con

⁵ Dicho criterio de valuación fue aprobado por el Consejo General de este Instituto en sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2018, en la Resolución INE/CG1386/2018, en acatamiento al recurso de Apelación número SM-RAP-210/2018,

la participación del multicitado artista, toda vez que el impacto del video investigado se realiza en el contexto promover su candidatura al amparo del nombre artístico con el cual es conocido “Pablo Montero”, a través de un video compartido en la red social Facebook.

En razón de lo anterior, utilizando la metodología señalada en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se determina el costo de los honorarios del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero” de la siguiente forma:

- Toda vez que en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados, y en el Registro Nacional de Proveedores, no se cuenta con registros respecto de honorarios de artistas con características o atributos similares a los del artista involucrado, se solicitaron cotizaciones con proveedores especializados en contratación de artistas que ofrecen el servicio a valuar para eventos con características similares al denunciado, en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. De lo anterior la autoridad instructora levantó razón y constancia.
- Con base en las cotizaciones obtenidas, se conformó la matriz de precios correspondiente.
- Una vez conformada la matriz, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la aportación no reportada por el sujeto obligado.

De lo anterior, se determinó lo siguiente:

Municipio	Concepto	Proveedor	Valor unitario con IVA por sus servicios artísticos	Cantidad
Aguascalientes, Aguascalientes	Pablo Montero	Agencia Artista TV	\$348,000.00	1
Aguascalientes, Aguascalientes	Pablo Montero	Artimex Booking Agency	\$550,000.00	1

Cabe señalar que en las cotizaciones obtenidas se precisa que los montos son únicamente por la participación del artista Pablo Montero, y dicho costo no incluye, entre otras especificaciones, transportación aérea, terrestre, viáticos, y hospedaje, razón por la cual, como informaron las agencias en comentario, los honorarios son semejantes en cualquier parte del país, pues los gastos por transportación, hospedaje y viáticos, entre otros, corren por cuenta extra de la persona que contrate al multicitado artista.

B) Honorarios del mariachi:

De la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, para efectos de cuantificar el costo de dichos gastos, se advierte que se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

- Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en la entidad.
- En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados, adjuntado la matriz de precios correspondiente.
- Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente al estado de Aguascalientes.
- En los casos en los que no se identificó información suficiente en el estado de Aguascalientes para valuar algunos de los bienes requeridos, y de acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, correspondientes al 2017, así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015.
- En razón del punto anterior, las entidades de Puebla y Tamaulipas coinciden con los parámetros del ingreso per cápita del estado de Aguascalientes.

De lo anterior, se determinó lo siguiente:

Entidad	Concepto	Valor unitario con IVA	Cantidad
PUEBLA	PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN GRUPO DE MARIACHI	\$5,500.00	1

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Entidad	Concepto	Valor unitario con IVA	Cantidad
PUEBLA	SERVICIO DE MARIACHI SANDOVAL 6 INTEGRANTES POR 1 HORA	\$2,900.00	1
PUEBLA	SERVICIO RENTA DE MARIACHI TRADICIÓN MEXICANA 12 INTEGRANTES 1 HORA EVENTO DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE PUEBLA, ALBERTO JIMENEZ MERINO EN TECAMACHALCO, PUEBLA EXPLANA DEL ZÓCALO, EL DIA 17 DE MAYO DE 2019	\$4,292.00	1
PUEBLA	SERVICIO DE MARIACHI GAVILANES 8 INTEGRANTES POR 1 HORA	\$2,900.00	1
PUEBLA	SERVICIO POR UNA HORA MARIACHI REY LATINO EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE PUEBLA, ALBERTO JIMENEZ MERINO Y DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2019 EN TEPEOJUMA, PUEBLA.	\$4,640.00	1
QUINTANA ROO	AMBIENTACIÓN 4 PERSONAS MARIACHI	\$1,160.00	1
TAMAULIPAS	SERVICIO DE MARIACHI A FAVOR DEL CANDIDATO MON MARON DISTRITO 21, TAMAULIPAS	\$2,320.00	1
TAMAULIPAS	EVENTO DE MÚSICA EN VIVO MARIACHI PARA RECORRIDO DEL DÍA DE LAS MADRES 10 DE MAYO 2019	\$7,000.00	1

Una vez obtenido el costo por los conceptos señalados, se procede a determinar el importe que debe ser contabilizado de la forma siguiente:

Entidad	Concepto	Costo unitario	Número de Unidades	Importe	Importe registrado	Importe que debe ser contabilizado
		(A)	(B)	(A)*(B)=(C)	(D)	(C)-(D)=(E)
Aguascalientes	Honorarios del C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias "Pablo Montero"	\$550,000.00	1	\$550,000.00	0.00	\$550,000.00
Aguascalientes	Honorarios del mariachi	\$7,000.00	1	\$7,000.00	0.00	\$7,000.00
Total						\$557,000.00

De esta forma se tiene que el otrora Candidato omitió las operaciones correspondientes a los honorarios correspondientes al C. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, alias “Pablo Montero”, y la contratación del grupo de mariachi que participaron en la grabación del video denunciado por un importe total de \$557,000.00 (quinientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).

7. Individualización de la Sanción (persona física con actividad empresarial).

Ahora bien, toda vez que en el **considerado 4** se ha analizado una conducta que violenta los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de la falta acreditada
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito se identificó que el sujeto obligado, omitió rechazar la aportación realizadas por una persona física con actividad empresarial, consistente en los honorarios del artista Pablo Montero y del mariachi que aparecen en el video denunciado, por un importe total de \$557,000.00 (quinientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en cumplir con su obligación de rechazar la aportación proveniente de una persona física con actividad empresarial en el periodo de campaña, atentando contra lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron

El sujeto obligado infractor omitió rechazar la aportación proveniente de una persona física con actividad empresarial contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Aguascalientes, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose durante la sustanciación del presente procedimiento.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar aportaciones realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil (persona física con actividad empresarial), en beneficio de su campaña, se vulnera sustancialmente el principio de equidad en la contienda.

Es decir, al tratarse de los procesos de elección de cargos públicos, la norma intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma. En efecto, éste es el valor que la prohibición pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos participantes en la contienda electoral.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.⁶

Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.

⁶ “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: (...) f) Las personas morales,

“Artículo 121. 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes: i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que, para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre otras, actividades comerciales.

De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir que "empresa" se refiere tanto a una persona física como a una moral, pues basta que de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter comercial.

En este sentido, por lo que respecta a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.

Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder

económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, transgrediendo el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.

Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el influjo de elementos diversos a los democráticos.

Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter mercantil que beneficia económicamente a un partido político, éste se encontrará influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.

Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter mercantil a favor de un partido político, éste se beneficia económicamente mediante un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.

Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:

- Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.

- Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en todo caso en beneficios no patrimoniales, aunque sí económicos.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente

implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o jurídico.

Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.

- No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.

Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la aportación en relación con lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, mencionados no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante, pues éste puede llevar a cabo la ilicitud incluso en contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del partido político.

Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la aportación, no implica eliminar el beneficio económico o patrimonial derivado de ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.

Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas con actividad empresarial, tal como ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente **SUP-RAP-67/2016**.⁷

⁷ En dicho expediente la sala señaló que “*válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las personas con actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones en especie o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos por parte de la autoridad administrativa electoral. La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como*

En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015,⁸ en la que se colige que **las personas físicas con actividad empresarial** que incurran en alguna infracción en la materia, como realizar aportaciones prohibidas por la ley a favor de un candidato o partido político, pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las personas morales, pues **realizan como actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, con fines lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales** y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, mismo que tiene una previsión normativa que impone a los partidos políticos un **deber de rechazar** las aportaciones provenientes de personas físicas con actividad empresarial, la cual es de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida en la conducta analizada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos,

partidos políticos, reciban aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades mercantiles, y por otro, como la prohibición de que las personas físicas con actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a favor de los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como partidos políticos (...) pues son sujetos de interés público en cuanto a los recursos que ejercen o manejan."

⁸ Tesis: XV/2015, Quinta Época, Jurisprudencia (Electoral) N° 1754, aprobada por la Sala Superior el 25 de marzo de 2015.

con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

Así, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una única irregularidad y, por tanto, en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del sujeto infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; mediante Acuerdo **CG-A-03/19**, se le asignó a Morena la cantidad de \$11'300,175.03 como financiamiento para sus actividades ordinarias para el ejercicio 2019.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a Morena con registro en el estado de Aguascalientes por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de julio de 2019	Montos por saldar
1	MORENA	INE/CG61/2019	\$1,464,244.00	\$470,840.63	\$993,403.38

Por lo anterior, queda acreditado que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica para hacer frente a las sanciones que en la presente Resolución se le impongan.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones realizadas por una persona física con actividad empresarial.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado, se actualizó al omitir rechazar aportaciones en especie de una persona física con actividad empresarial consistente en los honorarios del artista Pablo Montero y/o Oscar Daniel Hernández Rodríguez, y los honorarios del mariachi, contrario a lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i),; en relación con el 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad en el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado asciende a \$557,000.00 (quinientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado \$557,000.00 (quinientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$1,114,000.00 (un millón ciento catorce mil pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena con registro local en el estado de Aguascalientes**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades

⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,114,000.00 (un millón ciento catorce mil pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción.

8. Individualización de la Sanción (persona moral)

Ahora bien, toda vez que en el **considerado 5** se ha analizado una conducta que violenta el artículo 25, numeral 1, inciso i); con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la normatividad electoral.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en no rechazar una aportación de persona prohibida por la normatividad electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.¹⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió rechazar la aportación proveniente de una persona prohibida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Aguascalientes, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose durante la sustanciación del presente procedimiento.

¹⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.¹¹

¹¹ "Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...)"

"Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero."

El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,

político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permite precisamente la fiscalización.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobado las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida en la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del sujeto obligado.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; mediante Acuerdo **CG-A-03/19**, se le asigna a

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Morena la cantidad de \$11'300,175.03 como financiamiento para sus actividades ordinarias para el ejercicio 2019.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a Morena con registro en el estado de Aguascalientes por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de julio de 2019	Montos por saldar
1	MORENA	INE/CG61/2019	\$1,464,244.00	\$470,840.63	\$993,403.38

Por lo anterior, queda acreditado que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica para hacer frente a las sanciones que en la presente Resolución se le impongan.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la normatividad electoral.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de una persona moral, por un monto de \$9,999.99 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$9,999.99 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²

¹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado **\$9,999.99 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$19,999.98 (diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena con registro local en el estado de Aguascalientes**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$19,999.98 (diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción.

9. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

Candidato	Cargo	Postulado por	Concepto	Monto
Francisco Arturo Federico Ávila Anaya	Presidente Municipal Aguascalientes	MORENA	Uso del restaurante "La Saturnina", para la grabación de un video	\$9,999.99
			Honorarios de Pablo Montero	\$550,000.00
			Honorarios de mariachi	\$7,000.00
			Total	\$566,999.99

En tal sentido, se ordena **cuantificar** el monto consistente en **\$566,999.99 (quinientos sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)**, al tope de gastos de campaña del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, entonces candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes, postulada por MORENA en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en dicha entidad federativa.

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de **MORENA con acreditación local en el estado de Aguascalientes**, y su candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, el **C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya**, en los términos del **Considerando 3** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de **MORENA con acreditación local en el estado de Aguascalientes**, y su candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, el **C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya**, en los términos de los **Considerandos 4 y 5** de la presente Resolución.

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 7**, de la presente Resolución, se impone a **MORENA con acreditación local en el estado de Aguascalientes**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,114,000.00 (un millón ciento catorce mil pesos 00/100 M.N.)**.

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 8**, de la presente Resolución, se impone a **MORENA con acreditación local en el estado de Aguascalientes**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$19,999.98 (diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.)**.

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Aguascalientes, se considere el monto de **\$566,999.99 (quinientos sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)**.

pesos 99/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo expuesto en el **Considerando 9** de la presente Resolución.

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, a efecto de que proceda al cobro de las sanciones impuestas a los partidos políticos en el ámbito local, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, para que dicho organismo a su vez esté en posibilidad de notificar al C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes después de haberla practicado.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de julio de 2019, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/64/2019/AGS

Se aprobó en lo particular por lo que hace al 25 por ciento de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**